

Bartra, Armando. **La izquierda mexicana en la encrucijada: de la resistencia al fraude electoral a la Convención Nacional Democrática**. *En publicación: OSAL, Observatorio Social de América Latina, año VII, no. 20*. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales: Argentina. 2006 1515-3282.

Disponible en la World Wide Web:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal20/bartra.pdf>

www.clacso.org

RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, DE LA RED DE CENTROS MIEMBROS DE CLACSO

<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

biblioteca@clacso.edu.ar

La izquierda mexicana en la encrucijada: de la resistencia al fraude electoral a la Convención Nacional Democrática

Armando Bartra*

* *Instituto
de Estudios
para el Desarrollo
Rural Maya, A.C.*

En las elecciones del 2 de julio de 2006 la izquierda mexicana, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República por la Coalición por el Bien de Todos, formada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia, estuvo a las puertas de llegar al poder por la vía comicial, recorriendo el camino seguido en años recientes por diversos países latinoamericanos.

Tránsito ordenado e institucional que fue abortado por una alianza de todas las derechas: el gobierno de Vicente Fox, que desde la presidencia de la República hizo campaña por su candidato, Felipe Calderón; el partido en el poder, Acción Nacional (PAN), que desplegó una calumniosa propaganda del miedo contra López Obrador; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que compite con el PAN por regresar a la presidencia de la República pero se une con él en la tarea de frenar a la izquierda; los grandes empresarios, que ilegalmente pagaron spots televisivos a favor de Calderón y con-

tra López Obrador; los medios de comunicación —sobre todo los electrónicos— que militaron abiertamente por el candidato de la derecha y contra el de la izquierda; la iglesia católica, cuya jerarquía instruyó a los fieles para que no votaran por los “enemigos de la vida”.

El proceso culminó con una desaseada jornada comicial, un cuestionado recuento de los votos y una parcial calificación de la elección, que le dieron el triunfo a la derecha por medio punto porcentual. Resultado objetado con argumentos jurídicos, a la postre desechados, por la Coalición por el Bien de Todos, y cuestionado políticamente por López Obrador, quien convocó tres gigantescas manifestaciones en la capital y sostuvo por 47 días un multitudinario plantón callejero de varios kilómetros, acciones que culminaron el 16 de septiembre con un mitin donde más de un millón de delegados conformaron la Convención Nacional Democrática (CND). Esta desconoció el triunfo de la derecha, nombró a López Obrador presidente legítimo y anunció que se iniciaba la lucha por refundar la República mediante una nueva Constitución.

Guía para forasteros

México ingresó al siglo XX con una revolución popular cuyo liderazgo hecho gobierno no sólo operó transformaciones justicieras; también refundó al Estado y desde ahí reordenó a la sociedad. En el campo, los modernos ejidos y comunidades rurales resultan en gran parte del reparto territorial posrevolucionario, pero a la vez que se entregaban parcelas se creaban organizaciones sociales fieles al gobierno reformador. En la industria, los sindicatos y centrales surgen de la lucha proletaria, pero también cobijados por los gobiernos progresistas. Y lo mismo sucede con las organizaciones patronales como las cámaras que representan a los grandes sectores empresariales.

A esto se agrega la reforma agraria y, después de la segunda guerra mundial, el impulso a una política desarrollista que propició por más de tres décadas un crecimiento promedio de la economía de alrededor del 6% anual, expansión promovida por gobiernos que tenían bajo su control los principales recursos naturales, el sector energético, la mayor parte de la infraestructura productiva y una franja importante de la industria y servicios. Y dado que el crecimiento se basaba en el mercado interno, tenía que ser en alguna medida redistributivo, de modo que el Estado atendía las premisas sociales del desarrollo proporcionando servicios de educación, salud, alimentación y vivienda a sectores importantes de la población trabajadora.

Esto dio sustento y legitimidad a un sistema de partido único que, al tiempo que promovía el crecimiento y cobijaba la acumulación empresarial procurando a la vez cierta justicia social a las mayorías trabajadoras, manejaba el país a través de un presidencialismo cen-

***“La Convención
Nacional
Democrática
desconoció
el triunfo de
la derecha,
nombró a
López Obrador
presidente legítimo
y anunció que
se iniciaba la lucha
por refundar
la República
mediante
una nueva
Constitución”***

tralista y vertical: una “monarquía sexenal”, a veces paternalista y proveedora y otras excluyente y represiva, pero siempre autoritaria. En un orden nacido de una insurrección popular y en el cual el partido en el poder se llamaba Revolucionario Institucional (PRI), los espacios para la izquierda contestataria y anti-sistémica eran muy estrechos, mientras que de modo natural la oposición política tendía a ser conservadora: una derecha contraria a las reformas justicieras y a la intervención estatal en la economía, pero enemiga también del autoritarismo; un Partido Acción Nacional (PAN) que podía ser a la vez reaccionario en su programa socioeconómico y políticamente democrático.

El modelo de crecimiento relativamente aut centrado y redistributivo se agota en la década del setenta, y en la década del ochenta se imponen las políticas neoliberales promotoras de la apertura económica indiscriminada, y anunciadoras de un crecimiento extravertido y globalizado, cuyos “daños colaterales” serían resarcidos, se decía, por la inminente e impetuosa expansión productiva. El crecimiento anunciado nunca llegó, pero sí sus costos sociales, agudizados por la oleada de privatizaciones de los bienes públicos y por el desmantelamiento de los servicios estatales a la población.

Una transición estructural y tres señales políticas anuncian el agotamiento del autoritarismo posrevolucionario mexicano. La primera es el paso de la fase de crecimiento dinámico basado en un modelo de desarrollo aut centrado y redistributivo a un período de estancamiento acompañado de políticas neoliberales extravertidas y socialmente excluyentes. La conversión se realiza en los últimos veinticinco años. Sin embargo, ya en la década del sesenta el movimiento estudiantil del ‘68 había sido un clarinazo de lucha libertaria en un país antidemocrático cuya economía seguía creciendo a buen ritmo.

Más tarde, en los setenta y principios de los ochenta, las “insurgencias” obreras, campesinas y populares evidenciaban la rebelión de los sectores populares contra un siste-



© Archivo OSAL

ma gremialmente corporativo y cada vez menos capaz de compensar con cierto bienestar la carencia de libertades. La última señal se presenta a fines de la década del ochenta, cuando la evidencia de que los tecnócratas neoliberales llegados al gobierno a través del PRI pensaban perpetuarse en el poder provoca la ruptura del sector "nacionalista revolucionario" de este partido: "corriente democrática" que transita de institucional a opositora, y que en alianza con la hasta entonces marginal izquierda socialista pone en pie un amplio movimiento cívico cuyo candidato a la presidencia en los comicios de 1988, Cuauhtémoc Cárdenas —hijo del mandatario reformador de la década del treinta— gana sorpresivamente las elecciones.

Ese triunfo es finalmente revertido por un descarado fraude electoral, pero convence a un importante sector de la sociedad mexicana de que el sistema puede ser vencido mediante los comicios, de modo que en los años siguientes nace y crece el PRD, instituto político de perspectiva electoral y programáticamente de centroizquierda, que agrupa a la corriente nacionalista revolucionaria escindida del PRI con diversas fuerzas socialistas, muchas de ellas provenientes del Partido Mexicano Socialista (PMS).

El PRD lanza de nuevo la candidatura de Cárdenas en las elecciones de 1994, comicios que pierde frente al sistema, al menos en parte por el voto conservador derivado del miedo que ocasionan el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), primero, y el asesinato durante la campaña electoral del candidato del PRI Luis Dolando Colosio, después. En las elecciones de 2000, el PRD va de nuevo con Cárdenas como candidato, mientras que el PAN lanza a un empresario de corta y exitosa carrera política caracterizada por su folclórica virulencia contra el partido en el poder. La campaña se transforma en un plebiscito a favor o en contra del PRI, en el que Vicente Fox capta la mayor parte del voto por la democracia, al ser el candidato opositor con mayores posibilidades de ganar. De esta manera, el fin del sistema de partido de Estado corre por cuenta de la derecha representada por el PAN.

El poder corrompe: conversión autoritaria de la derecha gobernante

Pronto resultó claro que el modelo económico del gobierno del PAN era el mismo que venían aplicando los gobiernos del PRI. Pero en sus primeros años Vicente Fox fue un presidente que, si bien no supo enfrentar grandes problemas políticos, como la congelada insurrección indígena de Chiapas, era respetuoso de los movimientos sociales, y poco dado a las soluciones represivas. Esto cambió radicalmente en la segunda mitad de su sexenio.

La debutante democracia mexicana se arruinó a fines de 2003, cuando el presidente Fox tomó la decisión de impedir a toda costa que el candidato natural de la izquierda—López Obrador, por entonces exitoso jefe de Gobierno de la Ciudad de México—llegara a la presidencia de la República. Se quebró el 20 de febrero del 2004 cuando, en la clandestinidad de un hotel, se reunieron para conspirar un representante del procurador general de la República, abogado de la Nación que nombra el presidente; un delegado del Centro de Investigaciones para la Seguridad Nacional (CISEN) dependiente de la Secretaría de Gobernación; el jefe de la bancada del PAN en el Senado; el abogado de Carlos Salinas, ex presidente priísta que durante su gobierno emprendió el desmantelamiento del estado social mexicano; y su asesorado, un empresario corrupto que había invertido en el PRD pensando cobrarse con contratos de obra pública pero se topó con la rectitud de López Obrador. Un extorsionador barato que había dicho a una reportera “haré todo lo necesario para que este güey no llegue” a la presidencia, y unas semanas después vendía sus videos emponzoñados a los personeros de un mandatario que compartía sus fobias.

Y dado que los videoescándalos donde se mostraba a militantes del PRD recibiendo dinero del empresario no acabaron con López Obrador, el presidente de la República decidió utilizar un problema de tierras menor para iniciar un amañado proceso penal contra el jefe

de Gobierno, desaforarlo, enjuiciarlo e inhabilitarlo políticamente, contando para ello con la Procuraduría General de la República (PGR), los diputados del PAN, los diputados del PRI, el presidente de la Suprema Corte, las cúpulas empresariales, la jerarquía eclesiástica católica y los principales medios de comunicación. Fox llamó a la siniestra conjura “la decisión más difícil de mi sexenio”, reconociendo públicamente que no se trataba de procurar justicia —ámbito donde la PGR es autónoma— sino de una ilegal empresa política del presidente de la República. Y si bien la andanada no acabó con López Obrador, que movilizó su primer millón de ciudadanos y a mediados de 2005 seguía teniendo preferencias electorales muy superiores a las de sus competidores, sí pasó a frustrar la incipiente democracia que tanta sangre y sufrimiento había costado.

Desde el momento en que Fox echó a andar el complot contra la candidatura presidencial de López Obrador, las elecciones de 2006 quedaron en entredicho, irremisiblemente manchadas por la prepotencia del poder. Y lejos de diluirse con el tiempo, la mancha se extendió, pues Fox y sus cómplices se empeñaron en el intento. Lo hicieron con descaro, sin el más mínimo rubor político. López Obrador “es un peligro para México” y “no lo vamos a dejar pasar” por un lado, y a Calderón “lo vamos a apoyar con todo”, le dijo el presidente de la República al líder del Partido Verde Ecologista. La conversación tuvo lugar a fines del año pasado, se hizo pública, y Fox no la desmintió. ¿A qué horas, si se la pasaba en los medios alertando contra los horrores del “populismo” y exaltando las virtudes de la continuidad?

En estas condiciones sólo había dos escenarios posibles: o López Obrador ganaba las elecciones superando la inequidad, o vencía el candidato de la derecha y de origen su triunfo era ilegítimo. El único matiz es que una gran diferencia de votos hubiera hecho menos trascendente la ilegitimidad, mientras que con un margen pequeño la inequidad devino fraude simple y llano. Porque las trapacerías manchan un triunfo holgado pero invalidan uno estre-

“Desde el momento en que Fox echó a andar el complot contra la candidatura presidencial de López Obrador, las elecciones de 2006 quedaron en entredicho, irremisiblemente manchadas por la prepotencia del poder”

cho, y según el cuestionado recuento del Instituto Electoral la diferencia entre López Obrador y Calderón fue de apenas medio punto porcentual.

Izquierdas y derechas

Al calor de la insurgencia cívica convocada por López Obrador desde 2005 se conformó un poderoso movimiento ciudadano, gremial y civil: una variopinta convergencia que rebasa con mucho al PRD. Y es esta confluencia heterogénea e inorgánica la que durante la campaña del 2006, en los comicios y en la presente lucha post-electoral, está enfrentando el embate colérico de los poderes fácticos y haciendo de López Obrador el líder indiscutible de la izquierda, y del PRD la segunda fuerza política de México.

Pero el logro mayor del movimiento fue definir claramente los campos. A diferencia del pasado, cuando el PRI era la izquierda institucional y el PAN representaba a la derecha democrática mientras que la izquierda política pocas veces rebasaba la condición testimonial, hoy está claro que en México hay dos proyectos de nación: el de la derecha, que sigue el paradigma mercadócrata inaugurado por el PRI y continuado por el PAN, un modelo que profundiza la exclusión económico-social de modo que deviene antidemocrático y a la postre represivo; y el de la izquierda, que cuestiona al neoliberalismo, se compromete con la justicia social y apuesta por la democracia. Se acabó la confusión: como en toda América Latina, hoy en México los alineamientos están claros.

Izquierda o derecha. Ese es el dilema. Más allá de la distribución clasista y geográfica de los votos por el PRD y por el PAN, la confrontación nacional no es norte contra sur ni ricos contra pobres, sino la disputa entre el proyecto de la izquierda y el proyecto de la derecha. Ambos son proyectos nacionales y multclasistas, aunque sus prioridades sociales y regionales resulten exactamente inversas: el lema de López Obrador es "Por el bien de todos, primero los pobres", mientras que el eslogan de la derecha, inspirado en la teoría del goteo, podría ser "Por el bien de todos, primero los ricos".

López Obrador lo dijo muy claro en el Zócalo durante el primer mitin por la limpieza de las elecciones:

Nos enfrentamos a un núcleo de poder económico y político [...] minoría rapaz que ha llevado al país a la ruina y lo ha convertido en un mar de desigualdades [...] Son quienes conspiran contra la democracia porque se oponen a un cambio verdadero; los que defienden la política económica antipopular y entreguista, que ha llevado al país al estancamiento, el desempleo y la emigración [...] son los que se han quedado con empresas y bienes de la nación; son los que ambicionan las pri-

vatizaciones del petróleo y la industria eléctrica; son los que han convertido al gobierno en un comité al servicio de unos cuantos, que ahora quisieran imponer a un empleado incondicional que les garantice perpetuar la corrupción, el influyentismo y la impunidad.

Este grupo ve amenazados sus intereses cuando postulamos y defendemos un proyecto alternativo de nación capaz de crear una nueva legalidad [...] una nueva economía; una nueva forma de hacer política; una nueva convivencia social con menos desigualdad y con más justicia. Este es nuestro proyecto, el que vamos a defender ante cualquier circunstancia.

Este pueblo necesita un cambio verdadero, no es nada más el asunto de la Presidencia [...] Es importante la Presidencia, pero lo fundamental es que podamos transformar a nuestro país, y por eso estamos aquí y vamos a seguir estando el tiempo que sea necesario.

Las dos vías

En la difícil —y promisorio— coyuntura que estamos viviendo, nada hay más importante para la izquierda mexicana que combinar adecuadamente la acción extraparlamentaria y el activismo desde el Congreso de la Unión, las legislaturas estatales y los gobiernos locales.

Contra lo que pretenden los extremistas de derecha y de izquierda, que conminan a elegir —adentro o afuera, arriba o abajo—, la real opción de la izquierda parece estar en la combinación virtuosa del movimiento de resistencia con la lucha dentro de las instituciones públicas. No por eclecticismo táctico, sino porque en los últimos años el bando progresista creció notablemente tanto en el ámbito social y ciudadano como en los espacios político-institucionales.

Durante el último sexenio, la izquierda se erigió como la más consistente alternativa nacional, tanto por su capacidad de convocar movimientos cívicos y gremiales como por sus propuestas programáticas, y también —hay que decirlo— por la reciedumbre y arrastre popular de su candidato a la presidencia, un político calado tanto en las astucias de la resistencia social como en las artes del buen gobierno.

Desde el 2001, una promisorio alternancia que a la postre resultó más de lo mismo desató la resistencia social de los trabajadores urbanos y rurales, víctimas de un modelo excluyente que golpeaba por igual a los más pobres y a los menos pobres, a los sueltos y a los organizados, a los gobiernistas y a los independientes, a los clientelares y a los democráti-



© CMI Chiapas

cos. En la segunda mitad del sexenio que agoniza, los panistas se esmeraron en crear sus propias organizaciones corporativas, como hoy Calderón atesora el apoyo de los caudillejos sociales. Remedos y escoria de un gremialismo de Estado cuyos buenos tiempos ya no volverán, porque un gobierno de los empresarios y para los empresarios puede arrojar migajas al liderazgo corrupto, pero a diferencia del “reformismo revolucionario” y el “desarrollo estabilizador” que durante las décadas doradas del sistema alimentaron la fidelidad de los sectores populares al gobierno, las administraciones neoliberales enterradoras del estado social no tienen nada sustantivo que ofrecer a los trabajadores del campo y de la ciudad, ni tampoco a los pequeños y medianos empresarios que dependen del mercado interno. Hoy alinean en las filas de la izquierda social las curtidas organizaciones independientes y autónomas nacidas en la segunda mitad del siglo XX, pero también una buena parte del que fuera gremialismo de estado y que ahora, de grado o por fuerza, milita en la oposición.

En el mismo lapso, ganó en presencia y credibilidad la izquierda política que por vía electoral ocupa espacios tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo. En parte porque, pese a pifias y tropezones de triste memoria, los diputados y senadores provenientes del PRD y el PT se fueron definiendo como la más consecuente oposición parlamentaria a

[AÑO VII N° 20 MAYO-AGOSTO 2006]

las reformas privatizadoras impulsadas por el foxismo, al tiempo que construían una agenda legislativa propia de carácter progresista. También porque, pese a que el desempeño de los gobernadores y alcaldes postulados por el PRD no siempre estuvo a la altura de las expectativas que generaron, lo cierto es que los desfiguros de sus pares provenientes del PRI y del PAN fueron mucho mayores. Pero sobre todo, porque la administración de López Obrador en el escaparate político de la nación que es la Ciudad de México no sólo fue buena, sino que marcó una diferencia entre los usos gubernamentales de la izquierda y los de la derecha, de modo que en las recientes elecciones capitalinas los candidatos del PRD arrasaron en la jefatura de gobierno, la asamblea legislativa y los gobiernos delegacionales.

Finalmente, después de tocar fondo hace tres años cuando se supo que con tal de avanzar en las elecciones legislativas intermedias había incurrido en las prácticas corruptas que siempre combatiera, el PRD recuperó parte de su legitimidad ante la opinión pública al responder con unidad y prestancia a los llamados movilizadores de López Obrador cuando las derechas se empeñaron en sacarlo de la jugada política. Por fin, con una causa justa por la que luchar, cientos de miles de perredistas remisos salieron del closet, y hoy las grandes marchas de la resistencia se visten orgullosamente de amarillo.

Habrà quien considere en exceso favorable la anterior ponderación de los avances sociales y políticos de la izquierda. ¿Pero cómo explicar de otra manera que en las pasadas elecciones el PRD y sus aliados pudieran duplicar el porcentaje de su votación pasando del 17 al 35%, de manera que hoy la izquierda tiene 15 millones de votantes, gobierna a alrededor de 20 millones de mexicanos —incluyendo los capitalinos— y es la segunda minoría en la cámara de diputados y la tercera en la de senadores? Además de que —en otro orden de cosas— es capaz de movilizar a dos o tres millones de mexicanos en las diferentes plazas del país y de concentrar a cerca de dos millones en la capital de la República.

Los progresos de la izquierda la pusieron en la antesala de la Presidencia, y los poderes fácticos se vieron obligados a emplear todos sus recursos, lícitos e ilícitos, para cerrarle el paso, y le birlaron la elección. Pero su triunfo resultó pírrico, pues el PAN dilapidó los restos de su herencia democrática y Calderón será un gobernante espurio. Lo más importante, sin embargo, es que las fuerzas progresistas se repusieron del golpe y hoy tienen una presencia inédita en la palestra política nacional. A dos meses y medio de las elecciones, al calor de una resistencia que convocó en la capital marchas de cerca de dos millones de personas, más de un millón de delegados provenientes de todo el país constituyeron la Convención Nacional Democrática (CND), que el 16 de septiembre —en medio de una febril muchedumbre ciudadana— desconoció a Calderón, declaró a López Obrador presidente legítimo, aprobó un programa básico de cinco puntos y se comprometió a impulsar un proceso Constituyente hacia la conformación de la cuarta República.

La Convención es más que un movimiento social de resistencia, pues en ella confluyen ciudadanos rasos, representantes de organizaciones sociales o civiles y militantes de partidos, pero también legisladores y gobernantes de los tres niveles. Porque no se trata sólo de resistir desde abajo y desde fuera a la imposición y de construir socialmente un nuevo proyecto de país: se trata igualmente de enfrentar las iniciativas de la derecha en el Congreso y desde los gobiernos estatales y municipales progresistas, al tiempo que en el legislativo se lucha por presupuestos favorables a las mayorías y por legislaciones justicieras que acoten, aquí y ahora, las previsibles veleidades privatizantes y desnacionalizadoras del nuevo e ilegítimo jefe del poder ejecutivo federal.

Los movimientos sociales, por sí solos, no bastan para cambiar al país. Así lo comprobaron los pueblos indios, las organizaciones campesinas y los sindicatos que en los últimos años participaron en acciones multitudinarias y persistentes a las que el gobierno presuntamente escuchó y con las que llegó a acuerdos: compromisos que, sin embargo, se hicieron humo en cuanto cesaron las movilizaciones. Pero tampoco las fuerzas de izquierda que ocupan espacios institucionales podrán hacer mucho si detrás o delante de ellas no hay movimientos populares que modifiquen a su favor una correlación de fuerzas que la alianza entre el PAN y el PRI hace desfavorable. A esto responde la transformación de la Coalición por el Bien de Todos en un Frente Amplio Progresista (FAP), formado por el PRD, el PT y Convergencia, que agrupa también a los gobernantes y legisladores provenientes de estos partidos. El cometido principal del FAP es promover desde las instituciones lo que la Convención impulsa desde la sociedad.

Caminando con las dos piernas: tres experiencias exitosas

En las últimas semanas ha habido ejemplos contundentes de que la combinación de vías es factible.

La resistencia no podía dejar pasar el último informe del presidente Fox a la nación desde el Congreso sin repudiar tanto su contenido como sus formas poco republicanas, de modo que los de “afuera”, acompañados por diputados y senadores, trataron de instalar un plantón en las inmediaciones del palacio legislativo. El despliegue policiaco-militar fue del tamaño del miedo de la derecha, y una nueva movilización ciudadana el 1 de septiembre hacia las tanquetas que custodiaban el Congreso se hubiera prestado a peligrosas provocaciones que a su vez habrían contaminado la protesta institucional de los diputados y senadores de la Coalición. Pero para sorpresa de la derecha ese día los de “afuera” permanecieron tranquilos, mientras que los de “adentro” tomaron la tribuna Constitución en mano, forzando la retirada estratégica del presidente, que tuvo que leer su informe por televisión.

Y lo hicieron no cuestionando a las instituciones sino defendiéndolas, no violentando al Congreso sino reivindicando su dignidad ofendida por el estado de sitio de facto al que lo había sometido el Poder Ejecutivo encabezado por Fox.

Una semana después, el presunto presidente electo, Felipe Calderón, dijo que su triunfo sobre la izquierda significaba la derrota del “pasado que amenazaba con atrapar a México en el odio y el rencor... Un pasado de violencia que desprecia la ley y aborrece a las instituciones”. Los aludidos del plantón ni siquiera se dignaron responderle. En cambio, en una reunión de los gobernadores estatales y en presencia del panista, cuatro mandatarios perredistas rechazaron la “inaceptable descalificación” en “nombre de los 15 millones de mexicanos que, como nosotros, votaron por la Coalición por el Bien de Todos”. Frente a una respuesta desde la resistencia callejera Calderón se hubiera engallado, pero ante los gobernadores tuvo que tragarse sus palabras y ofrecer una disculpa. Ese mismo día, los cuatro mandatarios publicaron una declaración —a la que de inmediato se sumó el jefe de Gobierno del DF— en donde saludan a la naciente CND.

Finalmente, la legítima decisión de la resistencia encabezada por López Obrador de “dar el grito de independencia” el 15 de septiembre en la Plaza de la Constitución amenazaba con provocar un choque inminente, pues sin una salida presentable para Fox, que según la costumbre era quién debía encabezar la conmemoración, los halcones de la presidencia estaban impulsando el desalojo del plantón. Y una vez más el golpe maestro de la izquierda resultó de la combinación de las acciones de los de “afuera” y los movimientos de los de “adentro”. En este caso, el operador fue la cabeza del gobierno perredista de la Capital, quien “dio el grito” ante una plaza repleta que coreaba “¡Obrador! ¡Obrador!”. Ceremonia cívico-política en la que vitoreó a Benito Juárez y a la “soberanía popular”, en la que se tocó la campana que la resistencia le había regalado al gobierno de la ciudad, y durante la cual el mandatario local estuvo acompañado por la senadora y luchadora histórica por la presentación de los secuestrados políticos, Rosario Ibarra de Piedra. Entre tanto, Fox daba su último “grito” en Dolores, Hidalgo.